

hoy escribe

Antonio Alvarez Solís (\*)

zelatan

EL AÑO QUE VA A PASAR

¿Qué hará el Gobierno?

No creo que lleguemos a saber qué harán con la modernidad a partir del 1 de enero de 1993. Porque con la modernidad ya no saben qué hacer ahora, cuatro años antes de entrar en vigor total el Acta Única, por virtud de la cual -ahí se consagra la niveladora libertad de circulación de personas y capitales- un español será presuntamente igual a un inglés, a un alemán o a un francés: la misma formación, idénticas posibilidades, equivalente poder financiero, paralela capacidad de mercado, similar operatividad tecnológica. Igual; exactamente igual. 1993.

Todo teórico.  
El hecho es que en la economía que han diseñado los socialistas no caben los treinta y seis millones de españoles. Y que esa incapacidad de la economía para alojarlos será aún más visible a partir del 1 de enero de 1993. La España socialista -y dejemos aparte el fácil sarcasmo- es una España de juego de minorías sobre tablero internacional de élite, con un crecimiento únicamente sectorial y un desarrollo regional. Más exactamente: la España socialista es una España de tardocapitalismo salvaje basado en un desarrollo minoritario a expensas de una economía sumergida. Sobre una sociedad sin tradición moral calvinista y sin ejercicio político liberal -aquella oferta, al menos filosófica, de crecimiento para todos el capitalismo salvaje está resultando entre nosotros doblemente ácido. La estratificación teológica de lo español se ha quedado sin el presunto poder moderador de Dios y se ha vuelto estratificación económica pura y dura. Crecer es entre nosotros -más aún que para nuestros grandes vecinos occidentales- desalojar al otro, sobreexplotar el entorno humano y físico.

No caben los treinta y seis millones de españoles en una economía que, como toda la economía occidental, y aquí agravada por las razones apuntadas, se basa en la constante reducción de sus protagonistas y en la plusvalía que facilitan unas masas condenadas a la marginación del consumo. Esos treinta y seis millones de españoles saben ya a estas alturas -empiezan al menos a saberlo o siquiera a in-

tuirlo- que su competitividad o la competitividad a que les invitan es pretensión imposible en el marco de un juego económico internacional en cuyo seno las grandes economías de escala no pueden quedar al albur de la libre competencia y en que los mercados y los grandes precios son gobernados por las decisiones políticas de un Sistema reduccionista. Más aún: esos españoles están percibiendo con inevitable claridad que el mismo diseño presupuestario de su Estado tributa a un orden de prioridades que no refleja las necesidades sociales de un país aún pobre sino que atiende a exigencias económicas transnacionales en las que se incardinan unos concretos protagonistas domésticos, pero sólo unos concretos protagonistas. Precisamente esa concepción presupuestaria manejada por la Administración socialista es la que -entre otras cosas, como la desmoralización de la vida nacional- lleva a que resulte paradójicamente imposible un acuerdo con los Sindicatos, a los que el presidente del Gobierno ofrece reiteradamente su voluntad de concierto a sabiendas de que las exigencias fundamentales de la calle no pueden atenderse dignamente con un simple baile o reajuste de partidas. Esa imposibilidad de atención es la que convierte lo reivindicativo en raíz de una gran cuestión de rango político y, por ende, conduce a un enfrentamiento Gobierno-Sociedad que aflora, frente a la legitimidad electoral del actual Parlamento y del equipo ministerial socialistas, la legitimidad de los movimientos ciudadanos. A partir de esos movimientos -sublimados en la huelga general del 14 de diciembre y en las manifestaciones del 16- el Gobierno socialista sabe que tiene que revalidar electoralmente su mandato si pretende reasumir con validez ética su capacidad legislativa y ejecutiva. El socialismo español en su formulación administrativa y política sobrenada la realidad profunda del país, que empieza a emerger con distinto signo y pretensión. La cacareada marcha hacia la modernidad transnacional -teórica cobertura de muchas opresiones y servidumbres- quedó interrumpida el 14 de diciembre.

Y bien ¿qué puede hacer ante tal realidad el Gobierno socialista?

Yo creo que el Gobierno socialista está inmobilizado entre los brazos de una poderosa tenaza. Si convoca elecciones antes de la primavera puede dejarse muchos escaños entre los dientes, alargados ahora, del desencanto nacional. Por ello ese Gobierno quizá estime que ha de esperar a que se produzcan dos posibles situaciones reequilibradoras de su poder: una agudización de la conflictividad social que pueda suscitarle como herramienta de gobernabilidad y una explosión de prestigio debida al hábil manejo de la presidencia europea por parte de Felipe González. Pero ambas esperas pueden disolverse a su vez en dos hechos que aumenten el deterioro gubernamental: que los movimientos conflictivos provoquen el decisivo desconcierto de la Administración ante un país crecido y consciente y que una serie de acontecimientos europeos, entre ellos el inicio de una posible recesión económica, oscurezcan la presidencia del Sr. González, que ha iniciado su andadura comunitaria bien confusamente.

En cuanto al otro brazo de la tenaza que agota al Gobierno en la incertidumbre de publicar o dilatar la convocatoria de elecciones parece visible que si se retrasa tal convocatoria a octubre o noviembre dará lugar a que se produzcan la galvanización de la derecha -ahora en busca de acuerdos eficaces de sus diversas familias- y la reconstrucción de la izquierda, respaldada y exigida a la vez por esa inquietud social que demanda cauces orgánicos de expresión. Una izquierda que articule movimientos, frentes y plataformas en una expresión electoral rica y generosa podría arrebatar un crecido número de sufragios al PSOE.

De ello hablaremos en artículos posteriores. Lo que ya no cabe a los socialistas es aferrarse a la idea de que protagonizan una modernidad inevitable y conducen un futuro ya iniciado.

(\*) Escritor

Belarriak dituenak...

Hona hemen hitzez hitz, eta cuskal itzulpen hutsean, Glasgow-en argitara, eta «Ireland's War» deritzen irlandar aldizkarian, 28. alcan, berriki irakur zitekeen Editoriala.

«Bada garaia Britainia Nagusiak Eire-tik aldegin zuten. Hauxe izan zen IRA-ren mezua Eire-ko Oglagh-ko boluntariek Lisburn-en, 1988ko Ekainaren 6an, 6 britaindar soldadu hil zituztenean. 1979z geroztik bere galarik larriak ekarri zituzten Kororaren Armadari ekintza distiratsu hark. Eta berriro ere hauxe erakutsi zuen: Britainia Nagusiak bere «mutilak» bere kabuz, nahita, ez baditu etxera itzultzen, IRA-k bidaliko dituela zerraldotan gero eta kopuru handiagoetan... Britainiar tropak Eire-tik behin eta bitariko joango ez direno, ez dute inon gordeleku segururik izango... Huteskondeetako emaitzek, bestalde, urte hauetan ongi erakutsi dutenez, irlandar herriaren gehiago garbi batek Britainia Nagusiak gure herriaren kontra daraman gerra anti-demokratiko eta odoltsua amaitzea nahi du, indar okupatzaileak Eire-tik betiko erretiratu... Arazo bakarra gaur, beraz, hau da: ia Britainia Nagusiak herri-orroa hori aditu nahi ote duen; ala, entzungor egiten duelako, IRA-k bere indarraren argudioa erabili beharko ote duen behin eta berriz... Erantzuna zein-nahi izanik ere, dena dela, gauza bat dago garbi: «garaia etorria dela Britainia Nagusia Eire-tik joan dadin».

Hots, Thatcher-en gobernuak ez-entzuna egiten du. Eta hilak eta sofrikarioak emendatuz doaz Eiren eta Britainia Nagusian. Itsu batek ere halako batez Irlanda askatuko eta batuko dela ikus dezakeelarik...

Besterik erantzun behar al da?

TXILLARDEGI

hemeroteca

Todo un golpe

(Fernando Onega, «Diario 16», 21-1-89)

Mientras Alianza Popular vivía uno de los momentos más felices de su historia, las estadísticas se empeñaban en amargarle la vida al Gobierno: el índice de precios al consumo arrojaba un balance anual que no permitía grandes gritos de júbilo. Aunque Carlos Solchaga diga que no se puede sustentar una teoría negativa sobre unas décimas, lo cierto es que, al cierre, casi se han duplicado las iniciales aspiraciones del Gobierno. Recuérdese que el objetivo primero era terminar el año en un tres por ciento de subida. Casi se llega al seis.

No es objeto de este comentario entrar en las consideraciones económicas del hecho. Pero sí resulta imprescindible hacer una mínima reflexión política. El incremento del IPC se conoce en el peor momento posible: justo cuando la tensión Gobierno-sindicatos está en uno de sus momentos más altos, y no se sabe si podrá alcanzarse algún acuerdo. En buena lógica, las centrales tienen que salir a la palestra a denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más castigados. También en buena lógica se tienen que crecer ante un Ejecutivo que ha visto fallar el principal de sus objetivos. Y será muy natural

que los partidos políticos de oposición aprovechen la estadística para hablar de fracaso de gestión, como ayer habló Rodríguez Sahagún. El IPC «ha caído» como una tromba de dificultades nuevas en un oscuro panorama social. Era el dato que faltaba para completar el cuadro de conflictos y la falta de esperanza de arreglos.

Pero es también una pésima proyección para el año 89. Dentro de unas semanas se estarán negociando varios miles de convenios colectivos. El Gobierno sugiere incrementos de un tres por ciento. Los sindicatos se han puesto de acuerdo para reclamar un siete. ¿Quién les va a apacar ahora de esa aspiración? Metidos como están en plena dinámica reivindicativa, ¿no han venido los hechos a darles la razón final? Todos los indicios siguen apuntando a una primavera caliente, que ya no estará en el sector público, sino que se va a desplazar a la iniciativa privada.

Solchaga o el fracaso de un político

(«El Correo», 21-1-89)

El conocimiento oficial de la tasa de inflación y del déficit comercial registrados durante 1988 ha desve-

lado el fracaso de dos aspectos cruciales de la política económica del Gobierno que tienen una clara repercusión en las expectativas de empleo a medio y largo plazo.

El hecho de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) haya terminado el año pasado en un 5,8 por 100, cuando las previsiones guber-

namentales eran del 3 por 100, con un error porcentual de casi un ciento por ciento, y que el déficit comercial se haya situado en nada menos que en 2,35 billones de pesetas, es una muestra palpable de que la política económica desarrollada por Solchaga no era perfecta ni la única posible, como se repetió hasta la saciedad.

Hoy se puede comprobar que fue un tremendo error político fijar para 1988 el objetivo de una inflación del 3 por 100. Y eso no significa, ni mucho menos, que no haya que luchar contra este cáncer, sino simplemente que esto hay que hacerlo teniendo en cuenta otras muchas variantes no sólo económicas sino también sociales.

